

VIERNES, 2
DE DICIEMBRE
DEL 2011

N02

La Voz de Galicia

GRANDES
DEBATES
DEL SIGLO
XXI

SUPLEMENTO ESPECIAL
DE ANÁLISIS Y DE
PENSAMIENTO



¿Puede hundirse el Estado de bienestar?

04 LA CRISIS REABRE EL DEBATE SOBRE LA SOSTENIBILIDAD DE LA SANIDAD PÚBLICA

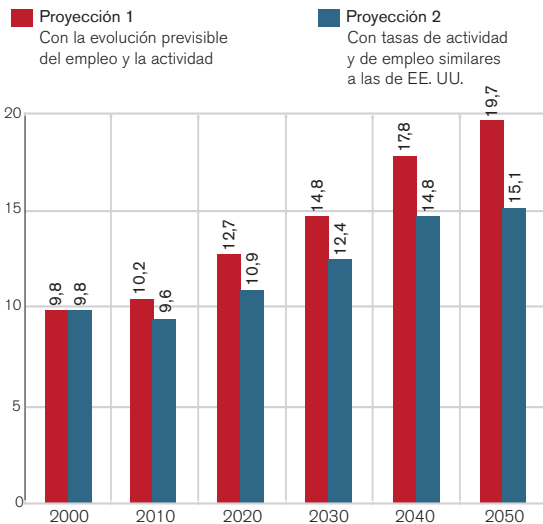
07 ¿CÓMO RECORTAR LA EDUCACIÓN?

08 ENSEÑANZA: INVERSIÓN EN FUTURO

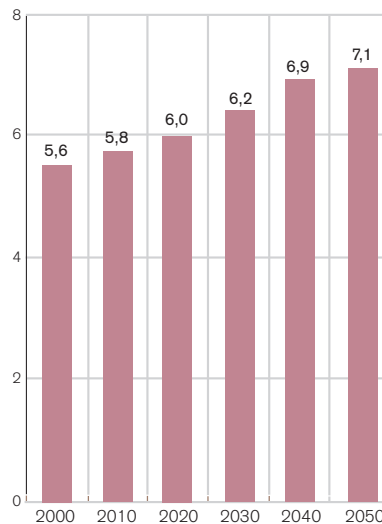
11 EL DECLIVE DEMOGRÁFICO LASTRA LAS EXPECTATIVAS DE GALICIA

PROYECCIONES DE GASTO PÚBLICO

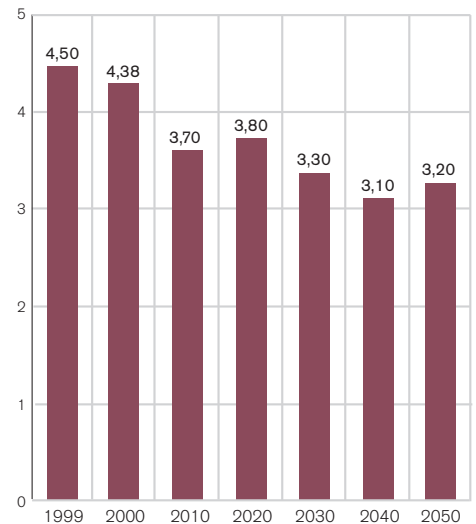
En pensiones sobre el PIB (%)



Gasto sanitario sobre el PIB (%)



Gasto en educación sobre el PIB (%)



Fuentes: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, INE, OCDE, Banco de España, P. Hernández de Cos y E. Ortega (servicios de estudios del Banco de España).

LA VOZ

EL ESTADO DEL BIENESTAR EN PELIGRO

Protección universal, ¿de la cuna a la tumba?

Urge una reforma del Estado de bienestar que le permita aguantar las prestaciones

MARÍA CEDRÓN

«Una protección universal del individuo de la cuna a la tumba». Ese es el principio fundamental del Estado de bienestar, una fórmula nacida en el Reino Unido después de la Segunda Guerra Mundial, propagada por Europa Occidental, instalada en España en los años ochenta y que ahora clama por una reforma para continuar viviendo.

«O concepto de protección es extraordinario, pero para sostelo hai que reformalo porque non somos capaces de mantelo, non é un chicle», explica el catedrático de Historia Contemporánea Ramón Villares. La cuestión es que hay que utilizar la tijera. El problema es dónde y qué patrón seguir. O, como pregunta el investigador del programa Pardo Pondal, Daniel Lanero, a qué tipo de gasto público quiere dársele prioridad.

Las piedras sobre los que se sostiene empiezan a erosionarse, tanto que algunos Estados se han visto obligados a empezar a hacer cambios en logros sociales como la jornada laboral o la sanidad.

Galicia no se ha quedado al margen. La política de austeridad abanderada por el Gobierno tomó forma en los muy adelgazados presupuestos de este año.

En relación al 2010, la sanidad perdió 192,7 millones de euros en recursos; la educación, 165,6 millones y Trabajo e Benestar, 64,8. Para compensar la reducción del margen de maniobra también se llevaron a cabo medidas como, por ejemplo, la confección de un catálogo de medicamentos enfocado a reducir la factura que se abona a los laboratorios, uno de los mayores gastos de la consellería. El ahorro alcanzó a finales del pasado mes de septiembre los 76 millones de euros.

Contención

Y el recorte presupuestario ha continuado este año en los presupuestos presentados hace unos días para el ejercicio que viene. Pero lo ha hecho de una forma mucho más comedida que permite continuar dedicando tres de cada cuatro euros del

presupuesto a la cesta social. Dieciséis y 12,1 millones en sanidad y educación, respectivamente, es a lo que llega el recorte, lo que supone una rebaja del 0,5 % en relación a este año. En bienestar, el descenso es de 20,6 millones. Galicia, que deberá dedicar 8,4 euros de cada cien a amortizar la deuda pública, trata de mantener ahora la cesta social, pero a costa de in-

«Los Estados han dejado de llevar ahora las riendas de la política monetaria»

En Galicia la sanidad perdió 192,7 millones de euros en recursos este año

La gran pregunta es cuál es la fórmula adecuada para cambiar el modelo

vertir menos en infraestructuras.

La crisis de la deuda pública de los países de la zona euro, que por efecto dominó también toca a Galicia, es quizá la mejor excusa que esgrimen los diferentes Estados para aplicar sus reformas y también es el principal detonante del debate abierto ahora en torno al Estado de bienestar.

«Los Estados han dejado de llevar las riendas de su política monetaria y el endeudamiento ha pasado a diseñarse en un mundo internacionalizado que no tiene reglas. Ahí están las agencias de rating para hacer subir o bajar los precios de la deuda», apunta el economista Xaquín Álvarez Corbacho.

En los foros es habitual escuchar propuestas impensables hace tan solo cinco años para hacer sostenible la fórmula. Porque qué Gobierno podía pensar entonces, cuando durante la primera legislatura de Zapatero se aprobaron avances que requerían gran esfuerzo financiero como la esperada Ley de Dependencia, en prescindir

de los servicios de algunos funcionarios como ha hecho Reino Unido, cerrar plantas de hospital como Cataluña o sugerir la introducción del copago sanitario en el envidiado modelo de salud español. En Portugal incluso ha habido alguna voz que sugiere recortar los salarios para poder competir con los sueldos de China u otros Estados de la zona, donde no hay política social.

Calma

Con todo, pese a la alarma propagada en la parte sur de Europa por declaraciones de ese tipo, parece que el Estado de bienestar no está tan en peligro como algunos pretenden hacer creer. «Hay excesos que se corregirán», explica Corbacho, mientras Ramón Villares matiza que, pese a los múltiples debates abiertos, «o Estado de bienestar é unha conquista extraordinaria da sociedade europea, unha marca de identidade». Además, Daniel Lanero, recuerda el papel del modelo como elemento fundamental para no agudizar las diferencias sociales.

El modelo ha de adaptarse a la estructura poblacional

El diseño de la pirámide poblacional en los distintos Estados de Europa ha pegado un giro desde los tiempos en que se creó la fórmula que sostiene el Estado de bienestar. La esperanza de vida ha aumentado, disparando también la factura dedicada a la dependencia, a las ayudas por jubilación o a la sanidad.

En Galicia, el problema es importante. El 21,8 % de los habitantes han superado la barrera de los 65 años. Y el índice de dependientes (mayores de 65 años y menores de 15) ronda el 51,32 % del total.

Este nuevo contexto es la excusa que tienen algunos para reclamar una adecuación del modelo. Pero el doctor Daniel Lanero habla de otros factores que deberían tenerse en cuenta. El papel jugado por los inmigrantes y su contribución a la Seguridad Social es un ejemplo.

Servicios pendientes de un hilo de seda

Comunidad autónoma y concellos han de sufragar buena parte de los logros del modelo

MARÍA CEDRÓN

Un total de 4,5 médicos por cada mil habitantes, 0,3 menos que en el conjunto del Estado. En torno a 3,7 plazas de hospital por millar de vecinos, 0,2 más que en España. Un índice de alfabetización del 98,2 %, un 0,5 % más que en todo el Estado. Más de un 22 % de población mayor de dieciséis años con educación superior. Esas son algunas de las cifras que dibujan el mapa del Estado de bienestar en Galicia, donde la sanidad y la educación se llevan en torno al 60 % de los fondos de la comunidad.

Y es que en España la gestión de esos dos pilares fundamentales de las políticas de bienestar está delegada en las comunidades autónomas. En

cambio, las prestaciones por jubilación y desempleo continúan corriendo a cargo de la caja central.

La cuestión ahora es cómo mantener los niveles de bienestar en un contexto en el que el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) previsto para el 2012 está entre el 1,1 y el 1,3 %, entre dos y cuatro décimas menos del anunciado en septiembre. «Un escaso crecimiento autonómico implica menos recursos y, en consecuencia las transferencias por parte del Gobierno central son menores», dice el economista Xaquín Álvarez Corbacho.

Garantizar la prestación sanitaria es también ahora uno de los reclamos utilizados por

la Xunta a la hora de pedir al Ejecutivo central los 805 millones de euros del plan de financiación.

El pasado mes de julio, la conselleira de Hacienda explicaba ya en el Parlamento que con la retención de esos fondos estaba en juego el Estado de bienestar. Lo hacía durante una comparecencia previa a una reunión con Hacienda donde luego reclamó un total de 243 millones para este ejercicio.

Ese escenario ha hecho resurgir ahora el debate

sobre el modelo de financiación autonómica. Frente a algunas voces que reclaman una reforma, economistas como Álvarez Corbacho apuntan que excepto que esto durase mucho no hay problema con el modelo actual.

Donde hay un problema es en los municipios. Durante los años de bonanza, cuando el ladrillo engordó las arcas de muchos gobiernos locales, hubo concellos que fueron asumiendo, poco a poco, competencias propias de otras administraciones. Para mejorar la calidad de vida de los vecinos y ganar unos votos, abrieron líneas de ayuda social. Ahora no hay dinero para sufragar sus costes. Las prestaciones están en el aire.

La lucha contra el fraude fiscal, la materia pendiente

La ecuación no da por muchas veces que se repase. Menos ingresos. Más gastos. Y creciendo. Ese sencillo argumento es el que apoya la urgencia de reformar el modelo de Estado de bienestar. Pero dentro de ese giro que pide el nuevo contexto económico social que vive Europa hay una materia que los distintos organismos competentes deberían abordar con urgencia. Es iniciar la guerra contra el fraude fiscal. Esa lucha podría traducirse en el incremento de ingresos, algo que podría ser capaz de reducir notablemente el recorte de gastos que tienen que asumir las Ad-

ministraciones para evitar que los números rojos las ahoguen.

Los cálculos realizados por el colectivo de técnicos de Hacienda, Gestha, apuntan que la economía sumergida resta a la comunidad cada año en torno a unos 2.000 millones de euros en ingresos.

La cantidad sería suficiente e incluso sobraría para equilibrar, por ejemplo, la balanza entre ingresos y gastos de la Xunta correspondiente al ejercicio del 2010, cuando los segundos superaron en 1.414 millones a los primeros. Todavía quedarían en la reserva más de 500 para dedicar a prestaciones.

Pilares fundamentales del modelo están delegados en las comunidades

Y la banda sigue tocando

LAUREANO LÓPEZ

En la película *Y la banda siguió tocando* (1993), al personaje que interpreta Richard Gere el médico le dice que le queda poco tiempo de vida. Gere se asoma a la ventana de la consulta y ve a un grupo de gente divirtiéndose. Entonces, susurra: «Se acabó la fiesta». También en el Estado de bienestar se está acabando la fiesta, si es que alguna vez, pues nunca fuimos Suecia, la hubo. Pero en España, la banda sigue tocando: mientras la clase política repite su canción —«nosotros, a lo nuestro»—, atrincherada, como los banqueros, en la defensa de sus propios intereses, en la España real, en la calle, los comercios bajan la persiana y el 22 % de la población activa no tiene trabajo al que echarle el diente. Vive el país una orgía de destrucción de empleo de la que no se libra este pequeño país, Galicia, cada vez más huérfano de referentes, ayer sin cajas, hoy sin bancos, mañana... Pero la banda sigue tocando. En esta esquina de Europa, periferia de una periferia de la periferia, la punta del iceberg es la crisis, el tsunami que arrasa con todo y se lleva por delante incluso los

bosques porque ya nadie trabaja el campo, y devora industrias y servicios porque nos estamos convirtiendo en satélite de un satélite de China. ¿Es la solución hacer y deshacer aceras? Se ha visto que no. Miremos bajo el agua. El iceberg se multiplica por siete: en Galicia, por 77. La tabla demográfica es *Saturno devorando a sus hijos*, una tendencia suicida: hoy el crecimiento vegetativo es del -8,6 %. En tres años llegará al -10,4 %. Cada día menos trabajan para sostener a más. Pero este argumento ya se está usando como coartada, no como un problema que hay que resolver. Otro dato para la zozobra: más de la mitad de los jóvenes universitarios emigran en busca de trabajo, en busca de futuro. Es la versión posmoderna de *Un franco, 14 pesetas*. Mucho de este talento no volverá nunca. En este

escenario, es preciso racionalizar más que nunca el uso de los servicios, eliminar solapamientos entre Administraciones, suprimir organismos y consejos que ya solo alimentan a quienes viven en sus poltronas, finiquitar, en fin, diputaciones y *gaiases*, acabar con estatutos propios de otra época, exprimir los recursos propios como en la frase hecha del porco, celta o castellano: aprovechar de él hasta los andares... El recurso al precio público, a la tasa, al impuesto-impuesto por los concellos, es pan para hoy y hambre para mañana: meter la mano en la cartera de quien ya no tiene ni cartera. La economía sumergida es otra trampa que solo sirve para ir tirando hasta que salte por los aires lo más sagrado: educación, sanidad y pensiones. Sin ellas, el

apocalipsis. Sí, se acabó la fiesta, pero como en la película, la banda sigue tocando. Como lo hizo hace 99 años para hacer la muerte más dulce, cuando el *Titanic* se hundió en las aguas gélidas de Terranova. Hoy, la banda toca desafinada un réquiem por el Estado de bienestar, saludando el Estado de malestar. Pero, o cambia la música, o se quedará sin auditorio que la pueda escuchar.



Sanidad pública: pronóstico reservado

La crisis económica reabre el debate sobre la sostenibilidad del sistema nacional de salud

ROSA DOMÍNGUEZ

Para todos, o para la inmensa mayoría, irrenunciable por necesaria, cada vez son más las voces que alertan de los peligros que amenazan al pilar básico del Estado de bienestar: la sanidad pública. Consumidor de cuatro de cada diez euros de las cuentas públicas, la crisis ha pillado al sistema nacional de salud pleno de exigencias, acuciado por una demanda de crecimiento cuasi ilimitado y costosos requerimientos tecnológicos.

Con un saldo negativo reconocido de al menos 15.000 millones de euros y un déficit acumulado de un 10 % anual, las previsiones no son halagüeñas en cuanto a necesidades: el envejecimiento y la dispersión pintan un escenario de patologías crónicas capaces de devorar antes de cambiar de década más de la mitad del gasto público de las autonomías.

Con este panorama, la espada del déficit, la reducción de ingresos, las devoluciones obligadas de anticipos y la minoración de los fondos de cooperación han dejado a las autonomías, con competencias casi plenas en materia de sanidad, al paio de una crisis que, pese a los intentos de blindaje del triángulo del bienestar social (salud-educación-dependencia), sí ha repercutido en los servicios. Que se lo digan a los catalanes, donde las barbas ya están más que cortadas. Sus vecinos, de Norte a Sur y Este a Oeste, ya han puesto las suyas a remojar a pesar de la impopularidad de medidas que, más pronto que tarde, acaban en listas de espera cada vez más desesperantes. Eso sin contar el impacto de la gran maquinaria de un sistema que, pese a la etiqueta de gratuito y universal, amenaza con arrastrar a una lista de proveedores que, a fuerza



La dispersión y el envejecimiento añaden dificultades al sistema público de salud gallego. FOTO XOÁN CARLOS GIL

de plazos desproporcionados, se han convertido en los financiadores a interés cero de una sanidad que no tiene precio pero

sí costes altísimos.

En este marco, Galicia, paradigma del envejecimiento y la dispersión, afronta el tercer año de recortes presupuestarios. La sanidad gallega del 2012 contará con un 6,6 % menos de fondos que en el 2010, aún a pesar de que su peso relativo en el conjunto de los

presupuestos aumenta. Son 3.530 millones de euros los que se destinarán a la salud de los gallegos, de los que casi el 45% se

irá en personal y cerca de mil millones se los llevará la farmacia, pese a la promoción de genéricos. Para hacer frente a las grandes inversiones, la Xunta recurre a fórmulas de financiación privada que, critica la oposición, hipotecarán aún más una sanidad de pronóstico reservado.

La limitación de recursos coincide con una demanda imparable

Galicia ha recortado un 6,6 % el presupuesto con respecto al 2010

En la encrucijada

ENRIQUE CASTELLÓN

Médico y economista

El problema, llamémosle agudo, de la sanidad española, no es sino una consecuencia del problema económico general que afecta al país. Se ha invertido de más en infraestructuras y equipamiento tecnológico. Se ha generado un gasto recurrente —recursos humanos incluidos— a partir de ingresos que no eran sino coyunturales, como ha quedado de manifiesto. Y ahora hay dificultades para financiar todos estos excesos. A nadie se le escapa que es más fácil dejar de hacer que quitar, aunque parte de lo hecho sea en gran medida innecesario desde el punto de vista sanitario, aunque sin duda atractivo desde otras perspectivas. A estas alturas las explicaciones no resultan sencillas. Por eso la solución pasa por mantener el presupuesto, no crecer, eliminar lo obviamente superfluo y modificar la organización y los procesos para generar eficiencia. En otras palabras, resolver el

problema crónico de nuestra sanidad, que es la baja productividad, la rigidez y falta de autonomía —todo ello está relacionado— y sin duda, la escasa presencia de los profesionales en las grandes decisiones. Tendríamos que abordar más racionalmente los problemas médicos que afectan a nuestra sociedad hoy, como por ejemplo la cronicidad de las patologías relacionadas con el envejecimiento. Habría sin duda que modificar el papel de los hospitales y colocar al paciente en el centro de los procesos asistenciales. Los ciudadanos, sin embargo, no deben preocuparse, o no deben hacerlo en demasía. Sin maximalismos y con sentido común se puede construir un sistema más eficiente, no hay más que seguir el ejemplo de otros estados de bienestar más sólidos y al tiempo más flexibles que el nuestro. Por otro lado, la salud, que es lo que importa, no es solo una consecuencia de la asistencia sanitaria y aún menos en su versión «curativa». Este es un buen momento para abordar la prevención y otras políticas sociales coste-efectivas en términos de salud, una asignatura pendiente.

Agrupamiento de servicios, control de gestión y copago

España se gasta en sanidad cada año unos 83.000 millones de euros, el 72 % en el sistema público, lo que viene a representar el 6,5 % del PIB.

De los 60.000 millones que se lleva la sanidad pública, en Galicia, importante financiadora de la privada a través de conciertos, del orden del 50 % se dirige a recursos humanos, el 22 % a gasto farmacéutico y el resto a sostener las estructuras asistenciales. En este último trozo de tarta, la atención primaria come apenas el 15 % y los hospitales y la atención especializada, en general infrutilizados en horario de tarde pese a su costosísima tecnología, el resto.

Sin embargo, es en el entorno del médico de cabecera donde, según los expertos, radica la principal arma resolutoria, por eficaz, eficiente y ahorradora de recursos mucho más costosos, de un modelo que para ser sostenible exigirá reagrupar y compartir los servicios altamente cualificados, incluso entre diferentes comunidades. Esta medida salvaría a la vez, apuntan los especialistas, las diferencias que ya se registran entre las carteras de servicios de las autonomías.

Un mayor control de la gestión, hacia la racionalización de los gastos corrientes, una política real de prevención sanitaria o la corresponsabilización del paciente en el uso adecuado de los recursos son otras de las recetas apuntadas para tratar de mantener el sistema. No entra entre ellas el copago, una herramienta que parte de Europa ha implantado como método no de financiación, sino de contención de la demanda.

La reforma de la Sanidad

Eficiencia en farmacia: Galicia, ejemplo para España

PILAR FARJAS ABADÍA

Conseleira de Sanidade

El sistema sanitario español, y por ende el gallego, se caracteriza por ser de acceso universal y gratuito —es decir, financiado por vía presupuestaria—, accesible y de calidad. Su funcionamiento consume 4 de cada 10 euros de los presupuestos de Galicia. Su nivel de excelencia depende de su capacidad para incorporar la docencia, la investigación, la innovación y las nuevas tecnologías, conocimientos y tratamientos.

Estas líneas enmarcan tanto sus debilidades como sus fortalezas. Si la financiación desde el Estado a nuestra comunidad ha descendido en un 20 %, necesariamente debe trasladarse a la gestión sanitaria el esfuerzo de invertir mejor cada euro de los gallegos, también los destinados a sanidad. Pero, a la par, debemos impulsar la capacidad del sistema de ser motor de cambio y crecimiento. En sanidad se puede, y se debe, gastar mejor. Eso es lo que significa eficiencia: analizar el gasto, conocer en profundidad cómo funciona el sistema sanitario y decidir dónde es posible reducir gastos para ver dónde debemos invertir para reforzar servicios, mejorar estructuras sanitarias o reforzar equipos.

Planificación, gestión, rigor, austeridad, acuerdos... son los términos que definen además cómo hacerlo.

Y Galicia comenzó a hacerlo. Era posible —y los gallegos lo están demostrando— reducir más de un 10 % el exagerado e injustificado gasto en recetas de farmacia. La aprobación de la Ley de racionalización de gasto farmacéutico y la aplicación del Catálogo priorizado de

medicamentos han sido el principal instrumento. De hecho, la entrada en vigor del decreto ley del Ministerio que establece la prescripción por principio activo —reconociendo la posibilidad de prescripción de medicamentos de marca a criterio médico dentro de fármacos del mismo precio— supone trasladar al resto de España el criterio establecido por el catálogo. El Ministerio de Sanidad hizo así, con 11 meses de retraso y después de una denuncia innecesaria sobre la que el Tribunal Constitucional emitió auto, una mala copia del catálogo gallego, que ya posibilitó un ahorro en nuestra comunidad autónoma de 84 millones de euros en el período comprendido entre enero y octubre.

Pero la tarea debe continuar. Es necesario adoptar medidas complementarias como reducir los stocks de medicamentos en botiquines caseros, residencias y hospitales; recoger de la farmacia solo los medicamentos que necesitamos; mejorar la gestión de la farmacia hospitalaria; extender a los gallegos que residen en centros de la tercera edad la dispensación en monodosis y por paciente desde las farmacias de los hospitales; aplicar un control en pacientes polimedcados...

Esta estrategia también se puede y debe aplicar en otras áreas de gestión: conocer las necesidades de personal, adecuar los equipos de trabajo, potenciar los servicios más resolutivos, reducir el fraude en bajas laborales, mejorar la productividad quirúrgica... todas estas son medidas aplicadas en el Sergas con la colaboración de los profesionales y que permiten mejorar los resultados en tiempos de espera, actividad quirúrgica y pruebas diagnósticas reduciendo el coste.

También, reducir los gastos corrientes mediante programas de austeridad, reducir los consumos mediante planes de eficiencia energética y

gestionar las adquisiciones de materiales mediante compras y gestión compartida. Un 24 % del presupuesto de gastos corrientes se está gestionando mediante concursos centralizados, con reducciones en algunos casos hasta del 40 % del precio al aglutinar todas las compras de un producto. Se puede gestionar mejor. Se pueden eliminar almacenes, stocks y caducidades mediante la plataforma logística y centrales de compras. Se pueden y se deben incorporar de forma intensiva las nuevas tecnologías que han reducido en 1.500.000 las consultas administrativas en el Sergas mediante la receta electrónica —alrededor de 250.000 horas de médico liberadas al año para diagnosticar y tratar al enfermo—, la historia clínica electrónica y la digitalización de imagen, compartiendo la información entre el médico y el hospital para evitar repetir pruebas y analíticas. Los avances en tecnología de laboratorios clínicos, de gestión de esterilización, de manejo de la imagen diagnóstica son campos que permitirán reducir drásticamente tiempos y costes; la teleformación, la biblioteca virtual, las escuelas online de pacientes son ya realidades; la telemedicina, la teleasistencia y monitorización médica... son el futuro que está ya en la entrada de nuestras casas y centros sanitarios.

Se puede y se debe. Para invertir en elementos que definan la excelencia de nuestra sanidad y para tener unos pacientes mejor informados, mejor tratados y más convencidos de que su colaboración y corresponsabilidad es la mejor garantía en este esfuerzo de gastar mejor para hacer una mejor sanidad y, de ser posible, a menor coste y en sectores que además generen empleos e iniciativas empresariales.

Esto es ahorrar en sanidad. Criterio y rigor en la gestión, eficiencia en el gasto y compromiso de mejora con nuestros ciudadanos.

Nin austeridade nin rigor

ANA LUISA BOUZA SANTIAGO

Deputada autonómica do BNG

Vénse de presentar o proxecto de Orzamentos da Xunta para o 2012, «un exemplo para España», di o presidente da Xunta, cun novo recorte en sanidade de 16 millóns de euros.

A atención primaria é por terceiro ano consecutivo a principal damnificada. Ao descenso en persoal dos centros de saúde, por non substituír vacacións, súmase agora a decisión de non cubrir tampouco as xubilacións. O aforro farmacéutico conseguido co catálogo nas receitas de primaria, volve ás farmacéuticas a través da farmacia hospitalaria, que medra 27 millóns de euros. Para compensar do menor beneficio por receita, elimínase a obriga das gardas nocturnas de farmacias no medio rural, por un procedemento con debate restrinxido: a lei de acompañamento.

Tamén sen debate preténdese eliminar a universalidade da asistencia sanitaria a persoas sen recursos, que quedan excluídas da atención primaria e deberán pagar pola atención en urxencias se a súa situación non está debidamente acreditada: un millón de euros prevé ingresar sanidade por este concepto. Elimínase pola vía de urxencia un dereito coa escusa de perseguir un abuso, o chamado turismo sanitario.

Para as novas infraestruturas deféndese cegamente o sistema de concesión privada usado no hospital de Vigo, máis caro e de menor calidade que o financiamento público, malia as advertencias do Consello de Contas sobre o abuso que está a facer o Goberno deste sistema e da negativa da Consellería de Facenda a comprometer máis pagos nesta lexislatura.

Non todo son recortes; os concertos coa sanidade privada medran case que tres millóns de euros e ábrese a posibilidade de privatizar servizos como

hemodiálise ou radioterapia.

Se tiveramos un Goberno que gobernara para a xente, afrontaría as listas de espera cirúrxica (37.682 galegas e galegos agardando unha intervención) negociando fórmulas para manter os quirófanos públicos abertos todo o día antes de acudir á concertación coa privada. Se fora un Goberno rigoroso diría a verdade sobre o que se pode investir sen hipotecar o futuro, considerando necesidades reais, non intereses electorais. Un Goberno austero apoiaría seriamente a atención primaria, onde se resolven os problemas de saúde antes, mellor e máis barato. Os Orzamentos para o 2012 mostran que ningunha destas son prioridades para o Partido Popular.

Estamos no último tramo da lexislatura. Son os últimos orzamentos que este Goberno executará e dan a medida do fracaso que, en sanidade, está a ser a súa xestión: nin austeridade, nin rigorosa, nin competente, nin dirixida á maioría. Un mal exemplo para España, señor Feijoo.

JESÚS FERNÁNDEZ-VILLAYERDE Catedrático de Economía de la Universidad de Pennsylvania (EE.UU.)

«Hay que adaptar la protección social a las nuevas circunstancias»

NATALIA BORE

Jesús Fernández-Villaverde (Madrid, 1972) reclama una reforma «coherente y sensata» del Estado de bienestar en España precisamente para garantizar su supervivencia porque, insiste, «en ningún momento debemos renunciar a él». Catedrático de Economía de la Universidad de Pennsylvania, además de director del Penn Institute for Economic Research y ganador en el 2010 del Premio Fundación Banco Herrero al mejor economista joven, cree indispensable un rediseño del sistema de financiación autonómico, bajo la premisa de que «quien gaste, recaude» y le recomienda al presidente del próximo Gobierno que afronte las reformas precisas sin vacilar porque «tiene la oportunidad de pasar a la historia como un presidente que sacó a España del pozo o como un gestor del entierro de nuestra nación».

—En «Nada es gratis», el libro que acaba de publicar junto con otros expertos, apunta que España es un enfermo terminal.

—Quizás «terminal» sea un poco excesivo (no quiero transmitir la sensación de que este entuerto en el que nos encontramos no se puede arreglar), pero «muy grave» sí responde a la realidad.

—La crisis de las finanzas del sector público es una evidencia. ¿Cuál es el tratamiento a aplicar?

—El tratamiento es claro: consolidación fiscal, que no quiere decir más que colocar las cuentas públicas en una situación sostenible que asegure nuestra solvencia. Esta consolidación es costosa en términos de PIB y empleo, pero no nos queda más remedio: hemos llegado al límite de nuestra capacidad de financiación. A los españoles se nos olvida que seguimos endeudándonos mucho y los que nos dan el dinero están preocupados por si no lo podemos devolver. Sea usted sincera, ¿si fuera un pequeño empresario alemán o danés, compraría deuda del Tesoro español? Si duda está en la misma posición que los «malvados especuladores» a los que se les acusa sin razón. Hay que reducir gasto, sobre todo corriente, y —esto no se dice lo suficiente porque los políticos son cobardes— incrementar impuestos.

—Y en los gastos, ¿cuáles reducir?

—Pues muchos. Desde unas televisiones autonómicas que son un despilfarro a mil programas de gasto de difícil justificación. Pero también, y ahí duele más, ciertos pilares del Estados de bienestar que deben hacerse más eficientes. ¿Qué ingresos incrementar? IVA, especiales, crear una figura sobre la emisión de CO₂, elevar el grado de cumplimiento fiscal con una reducción del fraude, que se ha incrementado en exceso, y una eliminación de desgravaciones fiscales sin justificación. Y, por supuesto, ni hablar de recuperar la desgravación de la vivienda.

—Angela Merkel acaba de exigir que España deje de vivir del crédito. ¿Comparte la postura?

—Algo de razón no le falta, pero de esta crisis se sale utilizando la lógica de la economía y no fábulas de moralidad. Los alemanes no han entendido esto.

—¿Es el fin del Estado de bienestar, al menos, co-



«A los españoles se nos olvida que seguimos endeudándonos mucho»

«El que gaste, que lo recaude. No tiene sentido que ahora la Administración central recaude y las CC. AA. gasten»

Fernández-Villaverde considera «muy grave» la situación de las cuentas públicas, hasta el punto de hacer necesario el copago sanitario y un rediseño de las finanzas autonómicas

mo lo conocemos? Y, de serlo, ¿está la ciudadanía preparada para desandar lo avanzado en sanidad, pensiones o educación?

—Sí y no. Sí, del Estado de bienestar tal y como lo entendemos ahora. No, porque un Estado de bienestar mejor diseñado y reformado seguirá siendo una pieza clave en la articulación social de España. El Estado de bienestar es una de las grandes invenciones del siglo XX y en ningún momento debemos renunciar a él. Lo que tenemos que hacer es lo que nuestros vecinos del norte de Europa ya han hecho hace tiempo: adaptar la protección social a las nuevas circunstancias de un mundo globalizado y con una demografía muy mala para nosotros. Nadie ha sido tan valiente como Suecia en repensar el Estado de bienestar.

—El copago, o «repago», en sanidad, educación o servicios sociales, ¿será el único modelo viable?

—España es casi el único país europeo que no utiliza el copago en la sanidad. Es una medida para racionalizar el uso del servicio y evitar, por ejemplo, que la gente use urgencias para evitarse tener que hacer cola para ver al médico de cabecera. Todo sistema de copago incluiría facilidades adicionales para enfermos crónicos y personas de menores ingresos. Lo que no tiene sentido es que una familia de clase media pueda usar el médico de cabecera más en España que en ningún otro país comparable sin afrontar ninguna responsabilidad individual.

—¿Estamos abocados a un escenario de conflictividad social creciente, como en el caso de Grecia?

—No. Un liderazgo claro y decidido debería ser capaz de explicar a los españoles la necesidad de las reformas que aseguren nuestro futuro. Siempre

habrá algunos que protesten, pero serán los menos y el Gobierno no se debe dejar amedrentar.

—En España son las CC. AA. las que asumen un mayor porcentaje del gasto público. ¿Qué habría que cambiar para que tener el déficit bajo control?

—La responsabilidad fiscal: el que gaste, que lo recaude. No tiene sentido que ahora la Administración central recaude y las CC. AA. gasten. Además, necesitamos que los ciudadanos sepan qué se recauda y en qué se gasta, con un ejercicio de transparencia asegurado por consejos fiscales independientes. Finalmente, el Gobierno de España debe asegurar que las 17 comunidades remen en la misma dirección. Existen los medios jurídicos para ello.

—¿Hay que rediseñar entonces el sistema de financiación autonómica?

—Sí, en las líneas anteriores: reforzando la responsabilidad y la transparencia. Por otra parte, habría que replantearse el tamaño de las transferencias interregionales. Creo que las quejas de los catalanes tienen un buen grado de razón. Aunque no estoy de acuerdo con un cupo fiscal para Cataluña, la redistribución actual es negativa, para las comunidades que la pagan y para las que lo reciben. Como los Fernández-Villaverde somos vecinos suyos de Asturias, déjeme que le ponga un ejemplo. Cuando yo era un crío, Asturias era (y se notaba) mucho más rica que Galicia. Tras 40 años de subvenciones a todo trapo en Asturias (a la siderurgia, al carbón, a todo), Galicia tiene una economía mucho más dinámica y emprendedora. Cuatro décadas de transferencias han sido la tumba de la economía asturiana y han tenido un efecto corrosivo sobre los valores sociales.

Educación, ¿cómo recortar el gasto en un servicio básico?

Becas, centros y docentes sufren la merma de recursos

ELISA ÁLVAREZ

Más de seis de cada diez euros de las arcas públicas gallegas están destinadas a la educación y a la sanidad. Aunque infraestructuras, cultura o industria son las principales víctimas de la crisis, la disminución de ingresos y los recortes obligan a aplicar la tijera a departamentos tan esenciales como el sanitario y el educativo.

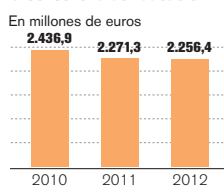
¿Pero dónde recortar en educación? ¿Becas, transporte escolar, comedores, libros de texto, personal? Los gastos corrientes se reducen y las partidas superfluas desaparecen, pero no es suficiente. La Xunta redujo en el 2011 los fondos de la Consellería en casi 166 millones. De cara al 2012 serán solo doce menos, pero se recortan los capítulos en los que es posible disminuir la inversión.

Con Galicia y Madrid a la cabeza, varias comunidades han salido a la calle para protestar por estos recortes. Y es que han llegado ya al capítulo de personal. En la comunidad gallega los propios responsables reconocen que en dos años el cuadro de profesorado ha caído en 900 docentes. El recorte más elevado, el de este curso, casi 600 docentes según datos de la Xunta, un millar si las cuentas las hacen los sindicatos. La ampliación de la jornada lectiva de los profesores en la práctica se traduce en la posibilidad de ahorrarse la contratación de cientos de docentes interinos.

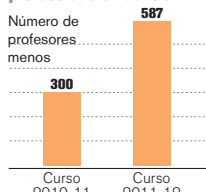
Cuando los números no cuadran, hay que reducir en todos los capítulos. Algunos tan impopulares como las ayudas para que las familias con rentas más bajas puedan adquirir libros de texto. Cuando se pusieron en

GASTOS EN EDUCACIÓN

Presupuesto de gastos en la Consellería de Educación



Reducción del profesorado en Galicia



LA VOZ

marcha se criticó que se estableciesen rentas muy bajas para dar las becas, pero de cara a este curso se redujeron las ayudas.

El transporte escolar le cuesta a las arcas gallegas unos 124 millones de euros anuales. Amén de condicionar los horarios de los centros para optimizar recursos, se han prorrogado las concesiones con las empresas para ahorrar 110 millones en una década. Ayudas para normalización lingüística, becas universitarias, ayudas a las ANPA para que gestionen comedo-

res o conciertos con centros privados han visto reducirse sus fondos. Incluso la Administración educativa envió una polémica instrucción a los directores de los colegios con comedores; padres que se retrasen en pagar la cuota mensual, niños que se quedan sin comedor.

Las universidades tampoco han escapado a la austeridad, y deberán seguir ajustándose el cinturón con un plan de financiación en el que una congelación de los fondos ya es una buena noticia.

A favor do privado

GUILLERMO MEIJÓN

Portavoz de Ensino do PSdeG-PSOE

N un contexto económico marcado por unha forte crise de carácter internacional, manter como un dos obxectivos prioritarios o fortalecemento do sistema educativo público non só debe resultar posible, senón que é algo absolutamente necesario para crecer, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Cambiar o actual modelo económico por un modelo orientado á sociedade do coñecemento só é factible mantendo e reforzando o investimento en capital humano. Xa que logo, a aposta por un sistema educativo público, universal e gratuito, que medre en equidade e excelencia, ven ser *conditio sine qua non* para poder abordar con éxito ese cambio de modelo. Investir en educación é investir no noso PIB futuro. Lamentablemente, os Orzamentos 2012 da Xunta reflicten novamente un rumbo totalmente contrario. A contabilidade creativa de Xesús Vázquez non pode maquillar as rebaixas sustanciais en becas universitarias e para FP, nas axudas aos comedores escolares ou a supresión da gratuidade dos libros de texto a seis de cada dez alumnos. A supresión de máis de mil docentes, os recortes en FP, a forte redución na financiación das universidades e da investigación, son outros exemplos dun rumbo que leva a desmantelar e desprestixiar o ensino público, en coherencia coas prácticas do PP alí onde goberna, aproveitando a crise para fortalecer o sector privado en detrimento do público.

Eficiencia en tempos de crise

XESÚS VÁZQUEZ ABAD

Conseillero de Educación e Ordenación Universitaria

En tempos de crise como os actuais, as decisións políticas adoitan estar no ollo do furacán. Nese contexto, no que ninguén con responsabilidades de goberno pode ignorar a situación na que vive o conxunto da sociedade europea, é máis necesario ca nunca facer cadrar as contas públicas para non vernos abocados a situacións indesexadas e temidas. E nese labor, o conxunto do Goberno galego sabe e defende de forma solidaria que deben ser a educación, a sanidade e os servizos sociais os eidos menos afectados por estes axustes porque son investimentos no futuro das novas xeracións e no benestar dos máis desfavorecidos. Por iso, é preciso facer reformas a prol da máxima eficiencia do sistema sen que sufra a calidade e sen que se erosione a boa fama que ten acadado o ensino, do que todos, especialmente os responsables políticos, os profesores e os pais, nos sentimos tan orgullosos. Ademais, somos moi conscientes de que o maior activo que ten o ensino é o seu profesorado. Por iso valoramos especialmente a súa resposta,

globalmente positiva e tranquila, aos cambios e novidades que tivemos que poñer en marcha. Aínda así, ás veces, observamos un certo desacougo interesadamente inducido. E se un non se axusta, por exemplo, á realidade nas cifras de folguistas —algo unívoco e contrastable polo control administrativo e polos descontos que se aplican— parécenos que tampouco terá autoridade moral nin credibilidade para dar outros datos referidos a horas impartidas por profesores ou número de docentes que asumen materias afíns, por poñer dous exemplos. Pero como o ensino dos nosos fillos e fillas é unha das nosas máximas preocupacións, tendemos a atender ante calquera noticia plantexada en termos intranquilizadores, moitas veces, sen pararnos a contrastala coa realidade. Este ano tomamos decisións que resultaron impecables pola optimización de recursos en busca da máxima eficiencia e que supuxeron incrementar a oferta educativa e a atención aos estudantes xestionando, globalmente, os mesmos recursos do ano pasado. Convertemos varios IES en Centros Integrados de Formación Profesional co fin de ofertar mil novas plazas, o que significou que alumnos e profesores da ESO e BAC dos centros desaparecidos, recolocáronse nos institutos máis próximos. Así,

espazos antes infrautilizados acollen agora moitos ciclos novos que abren portas ao difícil mercado laboral.

Por outra banda, a reordenación en primaria da xornada docente con máis horas de reforzo —máis útiles para os rapaces—, adecúannos ao horario xeral de España, sen aumentar o número de horas traballadas por profesor. Así pois, o único cambio é facer un labor en vez doutro, catro horas á semana. Pero tamen se adoptaron outras medidas de eficiencia e boa xestión; racionalizamos e reestructuramos as liñas de transporte para obter o mesmo servizo a un menor coste, centralizamos a contratación de comedores para obter importantes economías garantindo o mesmo nivel de calidade, renegociamos as tarifas de telefonía para conseguir o mesmo resultado a menor prezo, conveniamos cos concellos a xestión de comedores das ANPAS...

En fin, é lóxico pensar que a inminencia das eleccións xerais neste inicio do curso, moveu intereses políticos que pouco ou nada teñen que ver coa marcha do ensino en Galicia. A boa resposta do conxunto da comunidade educativa, pais, profesores e alumnos, fixo, porén, que se empezase con normalidade, polo que este conselleiro amosa a súa satisfacción.

¿Cuánto más puede bajar el gasto en educación?

Por primera vez en los últimos 30 años, España ha reducido el presupuesto de formación

ENRIQUE CLEMENTE

Hace poco más de un mes tuvo lugar en Madrid la primera marcha nacional contra los recortes educativos y en defensa de la enseñanza pública. Desde el inicio del curso se han sucedido movilizaciones de diferentes tipos en las cinco comunidades (Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha, Galicia y Navarra) que han reducido sus plantillas de interinos, con un saldo de 12.000 profesores menos, según los sindicatos. Estos hablan del «mayor ataque a la educación en la historia de la democracia». Las cifras avalan en alguna medida esta afirmación, ya que el gasto público total en educación —el de todas las Administraciones— ha descendido por primera vez en los últimos 30 años, de acuerdo con las previsiones del Ministerio de Educación. El 88 % del gasto corresponde a las autonomías, que tienen las competencias transferidas.

En el 2010 el gasto se elevó a 52.741,5 millones de euros y la de este año se estima que en 52.254,9



Protestas como la marcha por la educación pública en Madrid son frecuentes en los últimos meses FOTO KOTE

millones, una ligera caída, pero que si se compara con hace dos años supone un 1,5 % menos. Esto significa que la inversión baja de la cota significativa del 5 % que había alcanzado en el 2009 hasta situar-

Desde el 2007 el presupuesto educativo de Madrid ha bajado un 9 %

se en el 4,79 %. Descenso que coincide con un aumento de más de 165.000 alumnos. Es cierto que esto sucede en el marco de una brutal crisis económica. Pero también mientras a los dos principales partidos políticos se les llena la boca defendiendo la economía del conocimiento.

En Madrid, el Gobierno de Esperanza Aguirre encendió la mecha de las protestas al ampliar de 18

a 20 las horas semanales de clase en secundaria. La región ha vivido seis huelgas desde septiembre en rechazo por la eliminación de entre un millar y 3.000 puesto de interinos, según las distintas fuentes. Pero los recortes no son nuevos. Desde el 2007 el presupuesto educativo de la comunidad ha bajado el 9 %, de casi 5.000 millones a algo más de 4.500. Se acusa a Aguirre de

postergar la enseñanza pública y apostar por la concertada y la privada, lo que justifican algunos datos incontestables. Pero hay otros que avalan su gestión, como la extensión del modelo bilingüe

Todas las autonomías han reducido sus recursos en educación

a 276 colegios públicos, 64 institutos y 91 centros concertados o que Madrid obtuviera los mejores resultados de España en el informe Pisa, la evaluación realizada en 63 países que certificó que los alumnos madrileños se sitúan a la cabeza en España en comprensión lectora y superan la media en ciencias y matemáticas. Madrid es la comunidad que menos dinero público dedica a la educación en relación a su PIB, un 2,88 % en el 2009 frente a una media nacional del 5,03 %. Pero todas las autonomías sin excepción han reducido sus recursos en sus presupuestos de este año, desde el 1,4 % del País Vasco al 7,9 % de La Rioja, sobre todo por el recorte de sueldos de los docentes. Según los expertos, el descenso del gasto en educación se acaba pagando, aunque sea a medio plazo, y se traduce a la larga en un capital humano peor formado que disminuye la competitividad con los demás países. Recortar en educación es recortar la inversión en el futuro.

Repensar el servicio público de la enseñanza

RAFAEL FEITO

Doctor y profesor de Sociología, especializado en educación

Algunos gobiernos autonómicos, muy especialmente el de la Comunidad de Madrid, están acometiendo en estos últimos meses sustantivos recortes económicos en servicios sociales básicos como la educación pública. En el caso de Madrid el recorte ha consistido en asignar veinte horas semanales de docencia a cada profesor de la secundaria en centros públicos en lugar de las dieciocho que hasta ahora impartía. Para ello la presidenta regional no ha dudado en recurrir a la calumnia de que el profesorado tan solo trabaja esas dieciocho horas —su supina ignorancia concibe de este modo el trabajo del profesorado— y que, en consecuencia, pedirle dos horas de trabajo adicional, en un contexto de crisis económica aguda, no era mucho exigir. De paso lanzó la mentira de que esto ya sucede en Andalucía. En Castilla-La Mancha ni siquiera se miente: simplemente, como en 1984 de Orwell, se manipula el lenguaje y se niega que un recorte sea

tal cosa. Pasar de dieciocho a veinte horas significa lisa y llanamente reducir plantillas. De acuerdo con los sindicatos del sector se trata de una reducción de 3.000 profesores. El Gobierno regional indicó que para afrontar esta minoración se suprimirían las tutorías. Pero hay más. Un recorte de este calibre significa reducir considerablemente horas de biblioteca o de laboratorio o la supresión de desdobles en ciertas materias (como Matemáticas o idiomas) y cuanto se tercice.

Esta política es, se mire como se mire, suicida. Vivimos en una sociedad en la que el conocimiento es la principal materia prima de la inmensa mayoría de los procesos productivos. Traducido a términos escolares, según se consignó en el Tratado de Lisboa del 2000, significa que hay que conseguir que al menos el 85 % de nuestros jóvenes consigan como mínimo una titulación de educación secundaria superior, bachillerato o ciclos formativos de nivel medio-. Los recortes solo pueden empeorar nuestros resultados en este aspecto esencial.

El alumnado de la pública —el cual no para de

decrecer en Madrid— se encuentra en una clara situación de desventaja con respecto al de la concertada y la privada, redes hacia la cuales se dirigen crecientemente los grupos de mayor estatus socioeconómico.

Movilizaciones tan espectaculares como las de Madrid deberían llevarnos a repensar el servicio público de la educación. Hasta cierto punto la propia enseñanza pública es responsable de la expansión de las clases medias. Cuando desde la pública, especialmente sus sindicatos, se recurre a mentiras del mismo grueso calibre que las de Aguirre para defender la jornada continua en primaria o cuando se detesta la diversidad del alumnado se está lanzando el mensaje implícito de que es una escuela de la que hay que huir. Si realmente queremos que los sectores más dinámicos de nuestra sociedad vuelvan a la pública, y se unan a los que ya están aquí, esta debería empezar a funcionar en términos de escuela democrática, participativa, innovadora, dialógica, abierta al entorno y a las nuevas tecnologías. En definitiva, una escuela para el siglo XXI.

La reforma de la Educación

Non aos recortes

X. L. FRANCO GRANDE

Avogado, escritor e membro da Real Academia Galega

Seguindo aos máis notables economistas (Krugman, Stiglitz, Vicens Navarro, Juan Torres...), os recortes que se están facendo en educación, sanidade e atencións básicas non só son innecesarios senón que son contraproducentes. Hai outras maneiras de combater o déficit público sen necesidade de afectar a materias tan esenciais do Estado de benestar e, por tanto, sen prexudicar aos máis desfavorecidos. Por citar a un deles (Stiglitz), sábese ben o que ocorre cos recortes: «As economías van debilitarse, reduciáanse os investimentos e producirase unha terrible espiral descendente», como nos demostran as políticas contrarias ao gasto público de Herbert Hoover, causantes da Gran Depresión, e do FMI coas súas en Arxentina, Indonesia e Tailandia, ou agora en Irlanda e Grecia. Todo un fracaso anunciado que arruinou, e seguirá arruinando, a tantos países. A finalidade dos recortes é favorecer o negocio privado do ensino. A ese fin van destinados todos os medios para o calculado desprestixio da educación pública (brutal redución do número de profesores, disparates tan absurdos como forzar a que profesores dun materia teñan que ensinar as que non son da súa especialidade, rabenar os seus xa escasos salarios, destinar ao ensino privado sumas superiores ás recortadas ao público...) para, ao mesmo tempo, preparar o camiño para a aceptación do ensino privado. Entrégase a educación ao integrismo relixioso; santifícase o disparate pedagóxico da separación de sexos; non conta, cando convén, a profesionalidade de profesorado; ampárase o ensino da relixión (a verdadeira, naturalmente) e, por suposto, nada de educación para a cidadanía. Ou sexa, todo o contrario dunha educación pública laica, de calidade e moderna. Destrúese a igualdade de oportunidades, a educación inclusiva (para substituíla pola exclusiva) e esquécese canto prescribe o artigo 27-5, 7 e 8 da Constitución española, que se converte en papel mollado, para ter dúas clases de cidadáns, os de primeira e os de segunda, como ben escribiu Vicens Navarro. Naturalmente, os negocios están por riba dos intereses do país. Ao cabo, os recortes vannon levar á situación de Grecia; pero o ensino privado levaranos á Idade Media. E logo queren que non nos indignemos.

Inversión, no gasto

JULIO ABALDE

Profesor de la Universidade da Coruña

La actual situación de crisis económica genera en las Administraciones y la sociedad en general una contracción de gastos. Estas reducciones no deben afectar a aspectos fundamentales para todos los ciudadanos, especialmente los más desfavorecidos, y no deben tener consecuencias negativas difíciles o imposibles de revertir. En este caso se sitúan la sanidad, los servicios sociales y la educación, básicos para el desarrollo, cohesión y justicia social. De estos, quizás por sus consecuencias de futuro, la educación es el más preocupante. La educación pública, desde nivel infantil hasta la universidad, cumple la función fundamental de formar ciudadanos para el futuro y favorece la cohesión social, la igualdad de oportunidades y la promoción social basada en la capacidad, la formación y el talento. La educación representa una parte importante de los presupuestos públicos y es, por tanto, uno de los primeros candidatos para el recorte. Invertir en educación puede ser costoso pero no hacerlo es mucho más caro. Habrá que adoptar políticas de eficiencia y eficacia antes que recortes indiscriminados que afectan directamente a la calidad. Un sistema educativo y de generación de conocimiento no se puede improvisar, es un proceso largo y los retrocesos, como la reducción de profesorado formado, especializado y motivado, pueden ser irreversibles. Un buen sistema educativo garantiza disponer del capital humano, formado y altamente especializado necesario para el desarrollo social, para incrementar la competitividad y la actividad económica y será crucial para salir con garantía de esta crisis, por lo que es socialmente rentable ya que nos permitirá ganar el futuro. España ha tenido un desarrollo continuado que permitió acercarse a los países de nuestro entorno, pero todavía nos queda mucho para equipararnos a ellos. Nuestro gasto en educación todavía está por debajo de la media de la OCDE, aunque se ha hecho un gran esfuerzo pasando del 4,3 % en el 2006 al 4,95 % en el 2009. Detener esta tendencia sería dramático. La educación pública no es un gasto sino una inversión de futuro. Países como Alemania o Francia han decidido incrementar la inversión en educación e investigación como una garantía de desarrollo futuro. Nosotros podríamos hacer nuestras estas medidas.

Sen respostas

MACHÚS FERNÁNDEZ

Secretaría xeral de CC.OO. Ensino

O debate sobre a calidade do ensino converteuse, non só en Galicia, tamén no mundo civilizado que goza de certo Estado de benestar, nun temporal no que xa se traspasaron límites abondos. Non precisamos globos sonda para saber o que se está reclamando en debates e asembleas, xa non podemos seguir coa demagogia que pretendeu instaurar a Consellería de Educación o pasado mes de setembro, argumentando que non habería recortes orzamentarios nin de profesorado. Recentemente, vivimos tres manifestacións masivas, dous días de folga e os máis variados xeitos de protesta. Con estas accións, a comunidade educativa demostrou que as reivindicacións non son un problema de horario do profesorado, senón unha chamada de atención sobre o desleixo e o desprezo que o conselleiro e o seu equipo manifestan polo ensino público. En outubro tamén nos mobilizamos en Madrid: o seu proceder, señor conselleiro, non se desvíu un chisco dos postulados mantidos polos seus colegas madrileños, casteláns, murcianos... Madrid foi un mar de país e de nais, de alumnado e de docentes, indignados con vostedes e coas súas políticas educativas. Teimamos na reivindicación porque se algo nos sobra é paciencia. Tamén o fomos ver no Parlamento e comprobamos cómo retocou o seu discurso de setembro: a pesar de nos cualificar pouco menos que de esbirros da oposición, tivo que recoñecer que si houbo recorte de profesorado, aínda que culpe diso o Goberno central —mágoa para vostede que Andalucía tamén dependa de Madrid e non recorte. Velaquí algúns datos. O orzamento da súa Consellería para o ano 2012 mingua case o 2 %, sen contar a inflación. A situación vólvese alarmante se temos en conta os recortes que no ano 2011 sufriron todos os capítulos, sendo os máis significativos as partidas dirixidas á universidade (-12 %), formación do profesorado (-26 %), secundaria e FP (-8,8 %) ou prevención do abandono escolar (-23,6 %). Lamentablemente, isto é só un breve resumo do que está a suceder e do que estamos dispostos a debater; o problema é que non temos con quen. Nós non estamos na súa carreira electoral, agradeceríanos que as propostas da comunidade escolar e da sociedade fosen atendidas, porque é moi fácil tomarlle o pulso á opinión pública e este pulso, señor conselleiro, está acelerado.



¿Menos servicios, menos sociales?

España recortó el gasto desde el inicio de la crisis y Alemania lo aumentó casi un 4 % en el 2010

SARA CARREIRA

Hoy no se entiende en Europa una sociedad sin servicios sociales. Son un pilar básico del Estado de bienestar y engloban muchísimos sectores: guarderías públicas, ayuda en el hogar para ancianos, comedores sociales, centros de drogodependencia, talleres ocupacionales... Incluyen tantas áreas como la sociedad local necesite y todos se financian con el llamado Plan Concertado, en el que participan Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos.

Desde hace cuatro años, estos servicios se completan con la ley de dependencia, infinitamente más ambiciosa aunque por el momento con un engranaje también infinitamente peor.

De calidad

Los servicios sociales españoles son, a pesar de lo que pueda parecer, de gran calidad, y antes de esta crisis llegaban a más de dos millones de personas. Los hay públicos al cien por ciento, pero también los hay de la Iglesia, de ONGs o incluso de empresas que los desarrollan a cambio de un coste (con beneficio). Lo buenos que son lo ha puesto de manifiesto esta crisis. Casi cuatro años de dramas humanos y entre todos —familias incluídas— mantienen el equilibrio social.

La gran diferencia entre los servicios sociales actuales con respecto a los históricos es, tal y como recalca la ley de dependencia, la misma que hay entre la caridad y el derecho. Las sociedades

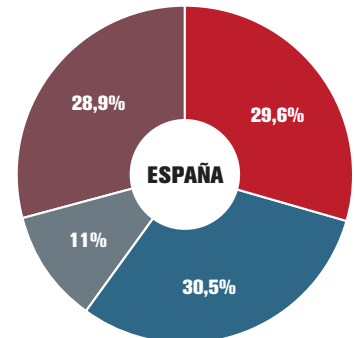
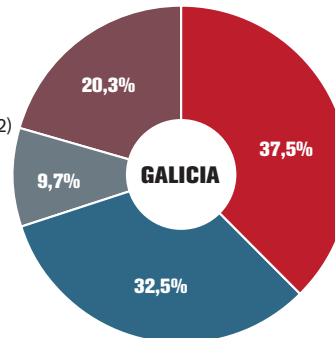
redistribuyen la riqueza desde hace siglos, pero hasta finales del XX se hacía de una forma subjetiva y aleatoria. Fue en el siglo XX cuando apareció la asistencia social. El siguiente paso fue convertir lo anterior en un derecho, tal y como recoge la Constitución española: todos los ciudadanos tienen derecho a educación, salud, justicia, trabajo y vivienda dignos. La inversión en servicios sociales repercute directamente en la salud del país. Los grupos desfavorecidos no tienen por qué serlo siempre y si el entramado social funciona, de estas clases surgen personas perfectamente integradas. Pero, es que además, los servicios sociales generan riqueza objetiva. Los estudios indican que por cada millón de euros invertidos en este campo se crean 30 puestos de trabajo estables y no deslocalizables. Y se calcula que por un millón de euros públicos destinados a los servicios sociales, el 44 % revierte en forma de impuestos y cotizaciones.

El problema que conlleva la crisis es la reducción del gasto en servicios sociales. Y ahí España ha apostado por el recorte. Desde el inicio de la crisis, en el 2008, el Estado ha reducido en casi 1.500 millones sus aportaciones al Plan Concertado. En cambio, Alemania sigue la política contraria: en el 2010 gastó en ayuda social 21.700 millones de euros, lo que representa un ascenso del 3,9 % con respecto al 2009 y el nivel más alto desde el 2005.

DICTÁMENES SEGÚN GRADO DE DEPENDENCIA

Situación a 1 de octubre de 2011

- GRADO III
- GRADO II
- GRADO I (nivel 2)
- RESTO DE GRADOS



Fuente: SAAD-IMSERSO, Servicio de Estadísticas de la Subdirección General Adjunta de Valoración, Calidad y Evaluación.

LA VOZ

Un reto polo que aposta Galicia

BEATRIZ MATO

Conselleira de Traballo e Benestar

Entre os retos que a grave situación económica actual presenta á Administración, os servizos sociais ocupan un lugar destacado. Non só porque preocupan á toda cidadanía senón porque, especialmente en benestar, atravesan un cambio. Un cambio que non por obrigado debe desprezarse, posto que abre a porta ao abandono de vellos hábitos prexudiciais: desde o asistencialismo doutras épocas, ata a idea de que o ámbito público non debe rexerse por criterios de eficacia e eficiencia. Dentro deste contexto xeral, a abordaxe da dependencia constitúe un caso paradigmático. A lei reconece o dereito a unha atención específica e, polo tanto, de maior calidade, a aquelas persoas que responden ao perfil da dependencia. É certo e non podemos obviar que a deficiente planificación económica da lei, xunto coa irrupción da crise, están a converter o seu cumprimento nun desafío. Especialmente para as

comunidades autónomas, que estamos a soportar un peso importantísimo do seu financiamento, por riba incluso do que a propia lei establece. Por iso, atravesamos unha etapa de transición: a atención á dependencia, coa importante mobilización de recursos que require, non debe facernos esquecer o resto de necesidades da área social —maiores, menores, inclusión, familia, etcétera—. En Galicia estamos a afrontar este reto, ademais, apostando polos servizos fronte ás prestacións económicas, pese ao seu maior custe. A elo contribuirán decisivamente ferramentas como a carteira de servizos e o mapa de infraestruturas sociais que temos promovido desde a Xunta.

Afrontar a oportunidade de mellora que ofrece a lei de dependencia, dotándonos de novos recursos específicos e de servizos de proximidade para que melloren a atención aos usuarios significa, tamén, apostar por un importante xacemento de actividade e emprego no terceiro sector. Ese é o horizonte que non debemos perder de vista. É o momento de demostrar o compromiso real de todos e todas para facer valer esas melloras.

Desmantelando o conseguido

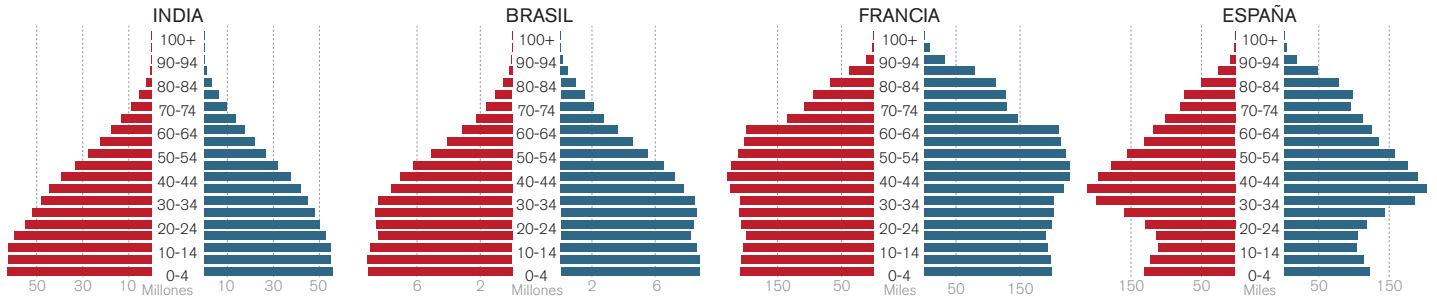
MARGARIDA CORRAL SÁNCHEZ

Secretaria confederal da Muller e da Mocidade da CIG

Baixo o pretexto da situación da crise económica mundial, os distintos Gobernos veñen decretando recortes no desenvolvemento do Estado de benestar.

Malia a aparente oposición do PP ás duras medidas adoptadas polo PSOE, non só non tomaron un rumbo diferente, senón que desde a súa xestión no Goberno galego manteñen unha actitude servil aos poderes da patronal e da gran banca, aceptando eres fraudulentos que deixaron na rúa a miles de traballadoras e traballadores. O feble Estado de benestar fica en perigo por todos os recortes na sanidade, no ensino e nos servizos sociais públicos. Coa escusa da crise puxeron en marcha o seu desmantelamento e privatización, eliminando os puntos de

información á muller, o Servizo Galego de Igualdade, as oficinas I+B, o programa Kanguros, o Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, centros Quérote, o servizo do Noitebús, o Plan Galego de Inclusión Social, o programa Entendo, reducindo os programas destinados á igualdade, á promoción do emprego, protección e promoción da muller, migracións, freo do abandono escolar, por non entrar a falar do copago que están tentando instalar tanto na sanidade (co escandaloso recorte do dereito á prestación sanitaria e farmacéutica ás persoas sen recursos económicos) como nos servizos sociais. Porén, non teñen reparo en financiar con cartos públicos a asociacións ultracatólicas no marco dunha lei —a de familia— que pretende devolver á muller ao seu rol tradicional. A sociedade galega non pode permitir que sexa a Administración a que desmantele unha conquista social que tantos esforzos levou conseguir.

PIRÁMIDES DE POBLACIÓN

Los países emergentes presentan pirámides de población con amplia base; en los desarrollados, la base —el relevo— se estrecha por la caída de la natalidad

A.L.C.

La peor pirámide demográfica del mundo

El gasto en jubilaciones en el 2050 superará en un 165 % al ingreso por cotizaciones

MARIO BERAMENDI

Hace ya más de un lustro, los economistas Juan Francisco Jimeno, Emma García y José Antonio Herce presentaron en Galicia un estudio que arrojaba una conclusión estremecedora. Consecuencia de un vertiginoso proceso de envejecimiento poblacional, en el año 2050 el gasto en pensiones superará en un 165 % a lo que ingrese la Seguridad Social por las cotizaciones de los ocupados. Esto es efecto de tener la peor pirámide demográfica del mundo, estrechada por la base a causa de la baja natalidad y ensanchada por la copa,

con grave riesgo de desdoblamiento, a causa del alargamiento de la vida de los mayores. En los últimos años, en todo el país han proliferado informes que ponen en entredicho la sostenibilidad a largo plazo del sistema público de pensiones y que aconsejan a los ocupados y futuros ocupados recurrir a las fórmulas de ahorro que ofrecen los mercados financieros.

Con su tono más crítico, los sindicatos y los partidos de izquierda han visto siempre en estas proyecciones un señuelo de la banca para vender sus productos, pero un análisis cruzado de los datos invita, cuando me-

nos, a una profunda reflexión. Gran parte de estas predicciones sobre la evolución futura de la relación cotizantes y jubilados se elaboraron antes del estallido de una crisis que introduce elementos nuevos. El problema ya no es solo la baja natalidad y el envejecimiento poblacional sino el incremento del paro y sobre todo la falta de expectativas de los jóvenes.

Como consecuencia de la crisis, los últimos datos revelan que, en los primeros nueve meses de este año, abandonaron la comunidad con destino a otros países 3.790 gallegos, la cifra más alta desde el 2002. A esto se su-

ma la creciente marcha de extranjeros y la escasa capacidad para atraerlos en un entorno económico deprimido y sin apenas expectativas.

La conjunción de todos estos factores conforma un cóctel explosivo a medio plazo. Y cuestiona la viabilidad futura de un modelo que debe pivotar sobre el equilibrio entre quienes aportan al sistema y quienes se benefician de él. Sal-

Lo que aportan los ocupados gallegos solo cubre el 85 % del coste en prestaciones

vo un brusco cambio del entorno económico, todo apunta a una asimetría cada vez mayor entre ambos polos.

En Galicia, lo que sí parece claro es que se trata de una comunidad que dependerá cada vez más de la solidaridad de la caja única de la Seguridad Social. Algo que ya ocurre ahora, pero que se verá profundamente agravado. Los últimos datos del Instituto Galego de Estadística sobre rentas de los hogares muestran que las cotizaciones sociales que generan los ocupados de los ayuntamientos gallegos son insuficientes para cubrir el coste de las prestaciones públicas, en

su mayoría jubilaciones. Un indicador que en Galicia sitúa la cobertura en el 85 %, cuando en el resto de España se encuentra en el 111 %.

Esto evidencia que en Galicia hay muchos ayuntamientos que viven más del pasado que del futuro, zonas donde no se han generado nuevas actividades que reemplacen las ocupaciones del sector primario. En 129 municipios, casi la mitad del total, por cada diez euros que se gastan en jubilaciones se recaudan cinco o menos en aportaciones de los trabajadores. Y nada hace presagiar que esta proporción cambie. Más bien al contrario.

La dignidad y la libertad efectivas

XOSÉ LUÍS BARREIRO RIVAS

Profesor de Ciencia Política

Llamamos Estado de bienestar a un modelo de administración que, en régimen de libertad y participación democrática, tiende a igualar a todos los ciudadanos en el disfrute de los servicios esenciales, utilizando como instrumentos la igualdad jurídica y de oportunidades y la solidaridad fiscal progresiva. Sobre la idea de libertad y participación, que definen por sí mismas la democracia liberal, el Estado de bienestar añade la garantía efectiva de esos derechos e ideales mediante una intervención redistributiva de los recursos sociales. Y frente a la defensa del marco competitivo con el que la democracia liberal impulsa las iniciativas y aspiraciones de las personas en el orden social y económico, el Estado de bienestar añade la garantía de un nivel mínimo de recursos esenciales que

fundamentan el digno ejercicio de la ciudadanía y la satisfacción de las necesidades básicas que definen esa dignidad.

Por experiencia y consenso, las generaciones actuales hemos convenido que el Estado de bienestar, cuya vigencia plena se corresponde con el resurgir de las democracias occidentales posteriores a la Segunda Guerra Mundial, se asienta sobre tres grandes pilares: el pleno acceso a la educación en todos los niveles; el disfrute generalizado de un sistema de salud de alta calidad y de carácter gratuito o casi gratuito; y la protección social de todos los ciudadanos, que solo puede distinguirse el esfuerzo colectivo a partir de garantías mínimas dignas y suficientes. Ello no obstante, hay que puntualizar dos cosas: que el avance hacia altos niveles de bienestar incluye necesariamente otros aspectos parciales —vivienda, cultura, ocio y espacios públicos de calidad—; y que la estructura interna de esos pilares del bienestar está sometida a revisión por cada una de las generaciones que disfrutan

el Estado de bienestar, de manera que puedan considerarse como básicos o no básicos algunos servicios que ahora no tienen esa consideración, o que dichos servicios puedan prestarse, con igual garantía y generalidad, mediante formas de gestión que se acerquen más o menos a la gestión directa del Estado.

La mayor virtud del Estado de bienestar es que hace efectivos los ideales de libertad, democracia, igualdad y bienestar que los regímenes liberales enunciaban y promocionaban pero no garantizaban. Y su mayor problema es que su coste progresivo ha de socorrerse en un régimen de solidaridad que desincentiva en buena medida la eficiencia del Estado y el esfuerzo colectivo. Y ese es el motivo por el que son muchos los políticos y economistas que, desde una perspectiva neoliberal, dan por evidente la insostenibilidad del sistema.

El equilibrio entre eficiencia y bienestar es, pues, imprescindible. Y en él nos estamos jugando el futuro político y social de la humanidad.

¿Quién le pone el cascabel al gasto?

ROBERTO L. BLANCO VALDÉS

Catedrático de Derecho Constitucional

GRANDES
DEBATES
DEL SIGLO
XXI

Cuando explico a mis alumnos la evolución de los derechos a lo largo de la historia, distingo siempre, al igual que mis colegas, entre los derechos de intervención y los derechos de abstención. Los segundos, que fueron los primeros en nacer, solo exigen para su efectivo cumplimiento que nadie —poder público o privado— moleste su ejercicio. Son los llamados derechos individuales (a la vida, la intimidad o la libertad personal), derechos todos que tienen en común la posibilidad de ejercerlos sin que los poderes públicos tengan que actuar para garantizar su contenido material: para poder moverme libremente basta con que nadie me lo impida, como basta con que nadie intervenga mi teléfono para disfrutar del secreto de las comunicaciones.

Los derechos de intervención, que solemos designar como sociales, se caracterizan justamente por todo lo contrario: porque solo cuando los poderes públicos actúan de una manera decidida con la finalidad de corregir las desigualdades que existen en la sociedad es posible que todos —y no solo los más afortunados— pueden tener asegurado su derecho a la educación, la vivienda o la salud. Pero entre los derechos del primer tipo y del segundo existe además otra notable diferencia: los personales son justiciables, es decir, uno puede acudir al juez para exigir que se le reponga en su derecho cuando por alguna razón se le ha violado. En contraste, la mayoría de los derechos sociales no pueden ser protegidos directamente, como tales, por los jueces sino, todo lo más, a través de las leyes que los regulan con la finalidad de darles cobertura. La razón, muy simple, es, al tiempo, la que determina la naturaleza tan diferente de los unos y los otros: mientras que la existencia de derechos personales no exige más gastos que los derivados de la acción protectora de la policía y de los jueces sin la cual no sería posible vivir en sociedad, asegurar los derechos sociales hace necesario gastar ingentes cantidades de dinero para construir sistemas de protección con capacidad de hacerlos efectivos de verdad: el sistema educativo, el sanitario y los de protección social frente a la vejez o el desempleo son, sin duda, los más fundamentales. Por eso, el debate en el que hoy estamos inmersos en España —aunque no solo en España— es el de qué hay que hacer para asegurar que esos sistemas esenciales puedan pervivir en el futuro. Ante cuestión tan dura de roer existen dos respuestas entre quienes defendemos la necesidad de mantenerlos: la que

afirma que los derechos sociales son intocables y la que acepta que puedan introducirse ajustes en su ejercicio para garantizar que todos podamos seguir en el futuro disfrutándolos.

La respuesta a ese dilema es complicada, pues, aun admitiendo —lo que parece razonable— que es mejor renunciar a una parte para poder seguir conservando lo esencial, sigue siendo bien difícil determinar el punto a partir del cual un recorte acaba desfigurando en realidad el auténtico contenido de un derecho. Y todo ello contando, por supuesto, con que en este debate se cuela siempre de tapadillo una quinta columna que lo que desearía en realidad es acabar con los derechos sociales y con aquello que los convierte en realidad: la redistribución fiscal. Es seguro,

por lo demás, que si esta mejorase en España tanto como debería, sería más fácil hacer lo que hoy a todos nos parece tan difícil: ponerle el cascabel... al gasto.



ILUSTRACIÓN
CANICоба

«Squat» o escuela

GONZALO BAREÑO

Periodista

GRANDES
DEBATES
DEL SIGLO
XXI

En el verano de 1981 viví en Londres en lo que entonces se conocía como un *squat*. Bajo ese término se escondía en realidad una casa que no estaba habitada y a la que se accedía por el método de darle una patada a la puerta. Allí vivíamos media docena de jóvenes de diversas nacionalidades. Yo fregaba platos en un restaurante. Un día pregunté a mis compañeros de piso en qué trabajaban. Me quedé atónito cuando me contestaron que en nada. Simplemente, vivían en el *squat*. Teníamos luz, agua, electricidad y calefacción gratis. Recuerdo que llegó una carta de un organismo oficial con el siguiente encabezamiento: «Dear squatters:». ¡La Administración no solo nos permitía vivir en una casa que no era nuestra y con todo pagado, sino que además nos trataba con respeto! Poco después, supe que todos mis compañeros cobraban cerca de 100 libras semanales del Estado británico sin otro requisito que el solicitarlas. Lógicamente, ninguno veía necesidad de trabajar para pagarse lo que ya tenía gratis. Consideraban estúpidos a los que trabajaban o estudiaban y directamente despreciables a quienes se enriquecían con su trabajo o su negocio. Aquello me parecía excitante, pero un tiempo después regresé a España convencido de que, lejos de una ayuda, aquello era una agresión contra una juventud a la que se invitaba a dejar los estudios y vivir sin trabajar, cercenando así de raíz cualquier posibilidad de progreso económico y social. Si alguien me hubiera dicho que eso era el Estado de bienestar, le hubiera mandado a paseo. Y, sin embargo, era eso lo que pensaban entonces muchas personas y no pocos Gobiernos europeos. Han tenido que pasar treinta años y llegar una crisis económica sin precedentes para que el concepto del bienestar que el Estado debe garantizar empiece a cambiar. Con un paro por encima del 20 % y una reducción brutal de los ingresos fiscales, el verdadero y único bienestar que puede y debe preservar el Estado, además de la sanidad, las pensiones y la educación gratuita, es el garantizar que todo aquel (y solo aquel) que esté dispuesto a formarse para trabajar o a emprender un negocio que genere empleo disponga de los medios para ello. Solo con esa política será posible que, en el futuro, la aspiración de los jóvenes y del resto de la sociedad sea vivir lo mejor posible con el fruto de su estudio, su trabajo y su esfuerzo. Y que quienes crean riqueza y empleo, lejos de ser considerados despreciables y egoístas, sean reconocidos como verdaderos motores de la sociedad y auténticos garantes del Estado de bienestar. Tratar de recuperar la política del *squat*, incluso cuando se supere la crisis, solo conducirá al suicidio social y económico.

ESTE NÚMERO DEL ESPECIAL GRANDES DEBATES DEL SIGLO XXI HA SIDO REALIZADO CON LAS APORTACIONES DE:

Julio Abalde, Elisa Álvarez, Gonzalo Bareño, Xosé Luis Barreiro Rivas, Mario Beramendi, Roberto L. Blanco Valdés, Natalia Bore, Ana Luisa Bouza, Pilar Canicoba, Sara Carreira, Enrique Castellón, María Cedrón, Enrique Clemente, Margarida Corral Sánchez, Rosa Domínguez, Pilar Farjas, Rafael Feito, Machús Fernández, X. L. Franco Grande, Xoán Carlos Gil, Kote, Leandro, Alexia López, Laureano López, Pablo Manzano, Manuela Mariño, Juan Carlos Martínez, Beatriz Mato, Guillermo Meijón y Xesús Vázquez Abad.

Los lectores pueden aportar sus datos, comentarios y opiniones en www.lavozdeg Galicia.es